

Ignacio Alcaraz Cánovas

Marruecos en la Guerra Civil española

**Los siete primeros días de la sublevación
y sus consecuencias**

Editorial Catriel

Índice

13	Introducción
19	Primera Parte: El Protectorado de Marruecos, clave de la Guerra Civil.
21	Junteros y africanistas.
26	Juan Moles y Armella, alto comisario del Frente Popular
35	Arturo Álvarez-Buylla, alto comisario interino
52	17 de julio de 1936
88	18 de julio
108	19 de julio
128	20 de julio
141	21 de julio
156	22 de julio
168	23 de julio
178	La internacionalización del conflicto
201	Segunda Parte: Consecuencias de la victoria franquista
203	El nacionalismo marroquí y la Guerra Civil
219	El éxodo de medio millón de españoles
228	El imperio español durante la República y la Dictadura
237	La ocupación de Tánger
244	Economía de guerra
252	La represión cultural
262	Derechos y libertades
269	La cuestión religiosa
276	La reforma agraria
282	El ejército
290	La República y la escuela
296	Autonomías y federalismo
301	Monarquía o república
313	Bibliografía

Introducción

El problema militar de España y la manifiesta vocación golpista nacieron del desmoronamiento del Ejército y del Estado después de la invasión napoleónica. Durante el siglo XIX, concretamente desde 1820, comenzó la era de los pronunciamientos y sublevaciones que habría de durar hasta 1875, fecha en la que se produjo la restauración borbónica y la entronización de Alfonso XII. Estas rebeliones dieron la triste imagen de un pueblo en permanente estado de guerra civil. Sin embargo, en pocos casos provocaron sucesos bélicos de envergadura, sobre todo porque la vida política del país no era asumida por la inmensa mayoría de los españoles, quedando limitada a círculos reducidos de militares o civiles en la órbita del poder. La historia reciente demuestra que sólo al hallarse las masas comprometidas con un modo de gobierno, o altamente críticas del mismo, el enfrentamiento ha sido grave y las consecuencias terribles y duraderas.

Entre 1875 y 1923 no hubo sublevaciones militares, a pesar de existir un sistema democrático en la gobernación del país. La tensión durante la regencia de María Cristina y en el reinado de Alfonso XIII tuvo cierta magnitud, pero los estamentos castrenses supieron mantenerse dentro de la legalidad constituida. Quizás influyera en ello la aventura marroquí que permitió desviar la inquietud del ejército, atraído cegadoramente por la posibilidad de esconder el deshonor de las derrotas en Cuba y Filipinas. España volvió a lo que Ortega y Gasset definió como la “nativa desnudez peninsular”. Este hecho y la codicia de la oligarquía financiera, ante el señuelo de la riqueza norteafricana, clausuraron por entonces la espita de la insurgencia.

Cerrado el paréntesis marroquí y con la amenaza del expediente Picasso, que trataba de aclarar la derrota de Annual, las circunstancias cambiaron. España se encontró en 1923 con la primera dictadura del pasado siglo XX, que acabó con la Constitución de 1876 y con el sufragio universal implantado en 1880. Primo de Rivera, el dictador, se exilió voluntariamente en 1930, por lo que no fue necesario un nuevo golpe militar, como tampoco

lo fue al advenimiento de la II República en 1931. Los generales y el resto de la oficialidad, en especial los africanistas, aceptaron dócilmente el nuevo régimen y los destinos que éste les ofreció.

La técnica de los golpes y las conjuras contra el poder constituido fue siempre la misma: militares y políticos exiliados o enfrentados al gobierno, se confabulaban en secreto, o pedían ayuda a otros países, para elegir a un general de prestigio o con mando sobre una guarnición importante. Se preveían las fechas para el pronunciamiento, las localidades en que tendría lugar y las personas que potencialmente podrían incorporarse al mismo. Para allanar el camino, se determinaba la neutralización de los militares y civiles opuestos, y se decidía el cambio de las autoridades del poder civil. Las otras guarniciones quedaban informadas de los hechos consumados y señalaban la postura a adoptar. Si Madrid se rendía, era fácil que las provincias siguieran a los vencedores, el ejercicio del gobierno borrado y las autoridades detenidas. En el golpe de 1936 se llegaría más lejos: nada de detención de personalidades sino su fusilamiento inmediato, la barbarie en estado puro.

La II República vivió en permanente temor a un levantamiento militar. En 1932 se sublevó el general Sanjurjo en Sevilla. En octubre de 1934 se produjeron los dramáticos acontecimientos de Asturias y Cataluña, sofocados por el gobierno de la derecha con los soldados mercenarios de África. Aquellos sucesos, encabezados por hombres y mujeres de la clase obrera, de la pequeña burguesía democrática, campesinos y cierto número de miembros de la burguesía liberal y autonomista, buscaban impedir la entronización de un sistema fascista de gobierno. Con su sola existencia, la sublevación proletaria de octubre, aunque fracasada, supuso el rechazo a la supresión de libertades políticas, sindicales y nacionales, en detrimento del capital financiero de signo totalitario, del que era entonces el mejor ejemplo el Estado hitleriano de Alemania.

Como resultado de estas tensiones, la República vivió hasta febrero de 1936 otra clase de problemas: la agitación social, el paro, la crisis económica mundial, los problemas regionales, la reforma agraria obstaculizada, las dificultades religiosas y, en especial, el egoísmo de las clases adineradas que propiciaron la evasión de capitales, se opusieron a las tímidas medidas en curso y financiaron abiertamente el alzamiento militar.

La llamada “dialéctica de los puños y las pistolas”, preconizada por José Antonio Primo de Rivera, jefe desde 1934 del partido Falange Española, tuvo mucho que ver con la desestabilización del país. En estos inadaptados violentos veían los grupos oligárquicos—agrario, industrial y bancario—el remedio para sus males. Fueron innumerables los asesinatos perpetrados por las bandas falangistas, que motivaron la reacción de grupos opuestos, hasta desembocar en las muertes de José Castillo y Sáenz de Tejada, teniente de infantería con destino en las fuerzas de Seguridad y Guardia Civil, y del líder del Bloque Nacional José Calvo Sotelo. Con la táctica del delito programado, los fascistas españoles pretendían seguir las directrices de Hitler cuando incendió el Reichstag y acusó del crimen al Partido Comunista. En España se inventaba el desorden y luego la sublevación para volver a la normalidad.

Es necesario reivindicar la verdad histórica, durante tantos años silenciada o tergiversada. La II República trató de mejorar la vida de los españoles, sin utilizar la fuerza ni la coacción. Con errores inevitables, reconocidos hoy abundantemente, el nuevo régimen promovió en corto lapso la modernización política y social del país, como se verá a lo largo del presente libro. La inflexión del proyecto republicano, que supuso el Bienio en que gobernó la derecha (1934-1935), motivó que en febrero del año siguiente se votara el programa del Frente Popular. Pero el miedo de los acaparadores de la riqueza nacional, con el apoyo de ciertos grupos clásicos de la subversión, temerosos de perder los privilegios de clase, desencadenó la más espantosa guerra civil que padeció España a lo largo de los siglos.

El general Sanjurjo, con la colaboración de varios generales como Mola, Saliquet, Queipo de Llano, Cabanellas y otros, urdieron la rebelión contra el poder legítimamente constituido. Sabían que podían contar con una parte importante del Ejército, encabezada por los africanistas, intranquilos por la reforma de Manuel Azaña; con la Iglesia, que veía cómo se vaciaban los templos; con los capitalistas y la alta burocracia, y con las formaciones paramilitares del naciente fascismo y el carlismo superviviente. Mola, el más inteligente de ellos, sabía además que era imposible ganar la partida a la República, que contaba con la adhesión del pueblo, y decidió finalmente que sólo en el Ejército de África, mercenarios que ofrecían su ayuda al mejor postor, podía confiar para su proyecto.

El odio de ciertos conjurados al gobierno del Frente Popular, aunque no al sistema republicano de gobierno (pues rechazaban de pleno la monarquía), pudo más que el temor a un posible fracaso, y llevaron a cabo sus planes que culminaron con el alzamiento del 17 de julio de 1936. El general Franco, como se sabe, se adhirió a éste en los últimos días de la conjura.

Pero la realidad era tozuda en cuanto a la viabilidad de la subversión. A pesar de coger por sorpresa a los dirigentes del Gobierno, la escuadra y la aviación se pusieron del lado de la legalidad. La práctica totalidad del territorio nacional fue ganada por las fuerzas populares y todo presagiaba un rápido desenlace de la situación, como en 1932.

En aquellos trágicos días, del 17 al 23 de julio de 1936, siete jornadas cruciales en la historia de España, el general Franco, que se apoderó sin esfuerzo del Protectorado de Marruecos y mandaba el ejército profesional de África, consiguió cambiar el rumbo de los acontecimientos. En ellos logró la internacionalización de la sublevación, al implicar a Italia y a Alemania en el movimiento y posteriormente en la guerra civil. El enfrentamiento entre los rebeldes y la España leal tomó un nuevo e inesperado rumbo, que terminó con la victoria de aquéllos por la aportación masiva de hombres y material de las potencias totalitarias.

Trato de explicar en este libro cómo ocurrió este cúmulo de sucesos históricos, y la forma en que el general Franco pudo convencer, en pocos días, a los citados países para que lo ayudaran a destruir a la joven república para instalar en España un régimen que tomaría como divisa la anulación pura y simple de los derechos humanos.

Los motivos invocados por los insurgentes para justificar la rebelión militar fueron diferentes a medida que avanzaba el conflicto en duración e intensidad: desde la “necesidad de anticiparse a una sublevación de los cabos” (Buruaga), hasta la defensa del cristianismo y la civilización occidental (aunque fuera con el apoyo de los musulmanes), e incluso por “hallarnos en vísperas de una revolución comunista”, a la que era preciso adelantarse. Tampoco faltó, como se verá más adelante, la necesidad de hacer frente a un supuesto caos o anarquía, que no era más que el fruto de la actividad disolvente de los pistoleros falangistas y de otros grupos parafascistas españoles, junto con la vocinglería de los diputados de la derecha que se servían del Congreso como caja de resonancia para sus proclamas catastro-